La dignidad fundada en la autonomía en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y sus proyecciones

Autor: Jorge Nicolás Lafferriere

Institución: Pontificia Universidad Católica Argentina, Proyecto VR11 021 A

Eje: Derecho y ética

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha mencionado el término “dignidad” (en adelante d.), o algún término derivado, en 355 oportunidades en 155 sentencias en casos contenciosos entre 1982 y 2018. En general, la d. se utiliza como principio o fundamento de los derechos y la Corte no se explaya sobre los alcances que concede al término. Sin embargo, a partir de 2012 y en el contexto de casos vinculados con temáticas referidas a la sexualidad, el derecho a la salud y las biotecnologías, la Corte adopta una visión de la d. asociada con la autonomía de la persona humana. En el caso “I.V. vs. Bolivia” (C329 – 30-11-2016), la Corte IDH sostiene: “El artículo 11 de la Convención Americana protege uno de los valores más fundamentales de la persona humana, entendida como ser racional, esto es el reconocimiento de su dignidad. El inciso primero de dicho artículo contiene una cláusula universal de protección de la dignidad, cuyo basamento se erige tanto en el principio de la autonomía de la persona como en la idea de que todos los individuos deben ser tratados como iguales, en tanto fines en sí mismos según sus intenciones, voluntad y propias decisiones de vida”. La misma fórmula se repite luego en el caso “Cuscul Pivaral y otros vs. Guatemala” (C 359 -28-8-2018) y en “López Soto y otros vs. Venezuela” (C 362 - 26/09/2018). Aunque no menciona a la autonomía, podemos reconocer un antecedente de este uso en el “Caso Artavia Murillo y otros” (C257 – 28-11-2012): “La protección a la vida privada no se limita al derecho a la privacidad, pues abarca una serie de factores relacionados con la dignidad del individuo, incluyendo, por ejemplo, la capacidad para desarrollar la propia personalidad y aspiraciones, determinar su propia identidad y definir sus propias relaciones personales”, que se repitió en el caso “I.V. vs. Bolivia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas” (C329 – 30-11-2016).

Esta identificación entre d. y autonomía resulta problemática. Ciertamente, la d. humana conlleva el necesario respeto por la libertad personal y la toma de decisiones sobre la propia vida y el propio cuerpo. Pero ello no debe conducir a reducir el concepto de d. a la pura autonomía. Ello sería un reduccionismo antropológico, de modo que se termina reconociendo únicamente la d. de la persona humana en la medida que sea autónomo y libre y, en consecuencia, se desprotege al ser humano en situaciones en que no puede expresar su autonomía. Como ha explicado Cianciardo, la determinación del momento desde el cual o hasta el cual la especial d. se posee no puede estar sujeto a condiciones.

La teoría que entiende que la d. tiene fundamento en la autonomía personal supone una aproximación antropológica dualista que, en los hechos, convierte al cuerpo humano en material biológico disponible para el ejercicio de la autonomía. Por eso, la visión de la d. asociada a la autonomía, sobre todo tal como lo decidió la Corte en “Artavia Murillo” en 2012, en el contexto de la expansión de aplicaciones biotecnológicas que pretenden modelar el cuerpo humano en función de parámetros de utilidad, no brinda parámetros objetivos para valorar las biotecnologías, desprotege a la persona humana en sus fases más tempranas y genera condiciones jurídicas favorables para derivaciones eugenésicas de esas biotecnologías.

Sólo una d. ontológicamente entendida puede ofrecer un principio fuerte para la valoración jurídica de las nuevas biotecnologías aplicadas al cuerpo humano.